Globethics Repository



El Jach´a Uru de Bolivia [The Uru Jach'a of Bolivia]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Dausá, Alejandro
Publisher	Centro Dr. Martin Luther King
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-04 23:08:05
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/213268

El Jach´a Uru de Bolivia

Por Alejandro Dausá

Uka Jach´a Uru Jutaskiway
Amuya Sipxañani Jutaskiway,
Taspacha Llakinacasti
Amuya Sipxañani Tukusiniu.
Tatanas Mamanaka
Uka Jach´a Uru Jutaskiway,
Tatanas Mamanaka
Amuya Sipxañani Jutaskiway.
(...Ya viene el Gran Día,
viniendo está,
démonos cuenta todos,
viniendo está.
Los hombres y las mujeres,
démonos cuenta todos,
viniendo está...)

on esta conocida canción, coreada en idioma aymara por decenas de miles de manifestantes, llegaba al corazón de la ciudad de La Paz, el 21 de octubre del 2008, la mayor marcha popular de la historia boliviana. Todas las bandas, compuestas tradicionalmente por bronces, sintonizaron en forma de una sola y gigantesca orquesta al aire libre. Días antes, el presidente Evo Morales había destacado el hecho de que por primera vez se iniciaba una manifestación política al compás de esas típicas bandas de música, en un ambiente definitivamente festivo.

El objetivo de la marcha era llegar hasta la sede de gobierno y persuadir a los diputados para que cerraran la fase de revisión de artículos de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y dieran luz verde a la ley de convocatoria a referendo, para someter su aprobación al juicio de todo el pueblo. Atrás quedaban meses de gran tensión y frustrantes mesas de diálogo con las fuerzas conservadoras. El Gran Día seguía amaneciendo.

En un conocido texto, José Carlos Mariátegui indica que la fuerza de los revolucionarios no reside sólo en su ciencia, sino principalmente en su fe y en su pasión; los mueve una fuerza mística, la fuerza del mito. El Gran Día al que hace referencia la melodía mencionada es también parte de un mito movilizador. El Jach´a Uru, según una leyenda indígena andina, es el tiempo en que terminará un ciclo de sometimiento y explotación para dar paso al Pachacuti, nueva era de justicia y plenitud. El pueblo pobre de Bolivia lo sabe porque guardó en la memoria colectiva esa esperanza.

Los Pachacutis

Se puede describir al Pachacuti como una suerte de renacimiento de las personas producido a partir de un cataclismo o fenómeno social que abre la posibilidad de transformación en las conciencias y estructuras. Los estudiosos de la cosmogonía andina mencionan dos Pachacutis claramente reconocibles. El primero se apoya en relatos orales que recuerdan una desastrosa inundación del lago Titicaca, cuyo desborde evitó el dios Tunupa (Wiracocha) navegando con su manta convertida en balsa, y abriendo la tierra rumbo al sur para facilitar el desagüe. En ese viaje el dios enseñó técnicas de cultivo y crianza de animales, así como una ética de solidaridad y ayuda mutua.

El segundo sucedió en torno al año 1600 d.C. con la erupción del volcán Wayña Phutiña, en Arequipa, el cual devastó la región y sepultó a gran cantidad de españoles que se habían refugiado en un templo cristiano.

Pacha significa tiempo, suelo, lugar, mientras que cuti evoca un fin, el cierre de un ciclo y también una vuelta. Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como Inca Garcilaso de la Vega, indicaba en sus Comentarios reales que “Pachacuti quiere decir mundo que se trueca”. Desde esa óptica, las catástrofes son manifestación de un gran cambio a través del cual una época finaliza y se produce una inversión del espacio y el tiempo. Pero indicamos que no se refiere únicamente a los desastres naturales, sino a

todas las calamidades sociales, con particular énfasis en las que generó la conquista (hecatombe demográfica, etnocidio, trabajo forzado en las encomiendas y mitas, profanación y saqueo de lugares sagrados, destrucción de estructuras organizacionales, imposición de cosmovisiones, entre otras).

El concepto de Pachacuti se reanimó a mediados del siglo XX debido a dos hallazgos. En 1955 el antropólogo peruano Oscar Núñez del Prado dirigió una expedición al recóndito caserío de Hatun Q´ero, en Paucartambo (los Andes peruanos). Los Q´ero eran una comunidad de unas seiscientas personas, últimos descendientes de grupos que huyeron de las atrocidades de los conquistadores y buscaron refugio en alturas superiores a los cuatro mil doscientos metros. Entre otras particularidades, guardaban en sus relatos la profecía del Gran Cambio, que indica que el mundo saldrá del revés en el cual se encuentra, se restaurará un orden social justo, y la armonía con la naturaleza será restituida. Los investigadores detectaron también allí la primera versión del mito de Inkarri.

Más tarde, el escritor José María Arguedas recogió otra versión de ese mismo mito en Puquío (Ayacucho). Aunque en la actualidad se reconocen más de quince variantes, el relato básico revela elementos de una elaboración andina y poshispánica que narra con gran complejidad simbólica la visión de la invasión y la conquista, a la vez que plantea la reconstrucción del Tawantinsuyu.1 Inkarri (el Inca-rey) es un dios del mundo andino, apresado con engaños por Españarri (España-rey), que lo descuartiza y esparce sus miembros a los cuatro puntos cardinales. La cabeza, enterrada en el Cuzco, está regenerando en secreto el cuerpo, que volverá para restaurar el mundo quebrado e inaugurar otra era.

No es casual que luego del asesinato y descuartizamiento de Tupaj Katari en 1781, como represalia por su insurrección contra fuerzas coloniales en la región de La Paz, las comunidades originarias hicieran una relectura del mito de Inkarri, advirtiendo que cuando sus miembros descuartizados se reunieran, comenzaría el Pachacuti para el Alto Perú. Unidad luego de la dispersión, reconstitución de entramados que se realiza en forma subterránea y con sigilo, vida que retorna fortalecida, lucha potenciada, son algunos elementos de ese mito que revela el “encantamiento del alma” mariateguiano, en contraposición a los mitos deteriorados e infecundos de la dominación.

Para los movimientos populares bolivianos, y más allá de los descubrimientos arqueológicos, la fuerza política del mito comienza a ser de nuevo visible en torno a la memoria del quinto centenario de la conquista, cuando los pueblos indígenas asumen la tarea de revertir el desmembramiento a que han sido sometidos.2

Movimientos emancipatorios parciales3

Como en la tragedia de Tupaj Katari, en la historia de Bolivia los descuartizados miembros insurrectos padecieron la dispersión de las particularidades que les dieron sentido y vigor a sus luchas. Como mencionamos, las primeras resistencias indígenas tuvieron un marcado carácter étnico-cultural y dejaron fuera a los grupos de criollos pobres. Tomás, Dámaso y Nicolás Katari, Julián Apaza, Gregoria Apaza y Bartolina Sisa fueron aymaras y su contienda se mantuvo circunscrita a ese universo.

El movimiento independentista que hace eclosión en 1809 en Chuquisaca y La Paz incorporó la dimensión patriótica y la de clase con los empobrecidos. Durante la denominada Guerra Federal de fines del siglo XIX entra de nuevo en escena el componente étnico-cultural con el liderazgo del aymara Zárate Willka (llamado “El temible”), que respaldó a los liberales en contra de las fuerzas conservadoras. Este líder fue capaz de movilizar grandes contingentes que combatían contra la conversión de comunidades indígenas en latifundios y procuraban una auténtica independencia. Logrados sus propósitos, los liberales advirtieron el peligro que Willka constituía con su prédica emancipatoria, y lo asesinaron, disolviendo así su movimiento.

La etapa del Estado oligárquico-liberal se deterioró hasta desembocar en la revolución de 1952 y el surgimiento del Estado nacionalista-dependiente, donde encontramos luchas con elementos socioclasistas, étnico-culturales, patrióticos e incluso atisbos de antimperialismo, acentuados estos últimos hacia mediados de los años sesenta. De todos modos, la dependencia y la escasa autonomía del proyecto, así como la disputa entre dos bloques sociales antagónicos (la izquierda del Movimiento Nacionalista Revolucionario y la Central Obrera Boliviana versus la oligarquía y las Fuerzas Armadas) fue el prefacio para una prolongada fase, signada por golpes y contragolpes militares y movimientos de masas que no lograron consolidar una propuesta viable.

A partir del período entre 1982 y 1985 se define en Bolivia el último bloque histórico, con netas características oligárquicas y neoliberales. Se ahondó la pauperización social, la reducción del Estado y la enajenación de recursos naturales a precio vil, que trajeron consigo un aumento brutal de la represión contra las legítimas protestas populares. El quiebre de este bloque se sintetiza el 17 de octubre de 2005 con la fuga del presidente Gustavo Sánchez de Lozada hacia los Estados Unidos, donde permanece hasta hoy en calidad de prófugo-refugiado.

En la actualidad el país se encuentra en un nítido período de transición entre lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, y se puede afirmar que más allá de posibles derivas nunca volverá a ser el mismo. Aunque muchas de las formaciones socioeconómicas y políticas anteriores se mantienen vigentes, están atravesadas por una severa crisis, pero fundamentalmente son objeto de graves cuestionamientos desde el campo popular. Por primera vez en la historia boliviana un

movimiento social diverso, poderoso e insurgente hace que converjan sobre sí todos los factores emancipatorios anteriores (socio-clasista, étnico-cultural, patriótico, antimperialista) en el marco del naufragio neoliberal. Como si lo anterior fuera poco, la presencia en la presidencia de un indígena contestatario y con liderazgo real, pone fin simbólico al rol de sumisión que se les reservaba a esos pueblos;4 su figura posee, además, la singularidad de conjugar múltiples identidades militantes, construidas en diferentes etapas de su trayectoria política, mediante las cuales se legitima frente a los diferentes sectores nacionales.

Refundar el país desde lo pluri-multi

Lo escrito más arriba nos ayuda a advertir que Bolivia se encuentra en una auténtica etapa de refundación, y es por eso que conviene destacar algunas de sus notas. Para comenzar, debemos recordar que se trata de un país formado sobre la base de elementos dispares desde el punto de vista cultural, económico, geográfico e histórico. Sólo la atracción potente de la minería colonial asentada en Potosí para la extracción de plata hizo que la república se constituyera como tal, en una dinámica concéntrica que sojuzgó la diversidad y la colocó al servicio de un saqueo más eficiente. Agotados los yacimientos del Cerro Rico, esa lógica centrípeta se reprodujo en diferentes períodos históricos, sencillamente a partir del cambio de los polos organizadores de la sustracción y los recursos naturales explotados (goma, castaña, estaño, petróleo, gas, bosques, vidas humanas…).

Por esto, en el primer párrafo del preámbulo de la NCPE se reconoce la pluralidad geográfica (amazonía, chaco, altiplano, valles, llanos) y la diversidad de seres y culturas. La única refundación auténtica del país se hará con la condición de superar las falsas integraciones y homogeneizaciones que se pretendieron imponer a lo largo de su historia, y que en la práctica funcionaron como enmascaramiento de un sistema marginador.

Como dato muy significativo, el preámbulo de la NCPE recupera, además, la pluralidad de luchas, desde las sublevaciones indígenas anticoloniales de finales del siglo XVIII hasta las recientes guerras del agua y el gas, en el 2000 y el 2003 respectivamente. Y es que tampoco habrá refundación posible sin honrar y rescribir la múltiple historia de luchas populares, en una dinámica centrífuga que reconoce como valioso cada combate librado en cualquier rincón del territorio nacional, por insignificante que parezca.

Lo pluri-multi alude y remite, entonces, a valores como resistencia y equidad en la distribución y la redistribución del producto social, en el seno de una nueva lógica enraizada en experiencias seculares de los pueblos originarios, condensada en el concepto del “vivir bien”.5 Dicho concepto implica una dimensión de satisfacción material austera, y propicia además la armonía y la complementariedad entre lo individual y lo colectivo. Socialmente abarcador por naturaleza, adquiere incluso singular densidad planetaria como paradigma emancipatorio, en un mundo en el cual las conjeturas acerca de la crisis ecológica y el fracaso del modelo económico y financiero imperantes se tornaron hoy en certezas. Se constituye también en horizonte utópico que cuestiona el modelo del “vivir bien” realmente existente (individualista, autosuficiente, irresponsable, insolidario, consumista, depredador, ecocida, genocida), que es hoy patrimonio de buena parte de la humanidad.

Como es natural, el reconocimiento efectivo y la construcción de lo pluri-multi no es ni un dato acabado ni una ruta sencilla, ya que implica asumir otra forma de cultura, de convivencia, de territorialidad, de manejo de recursos naturales, de modelos de desarrollo y de institucionalidad estatal; nada menos que un viraje en las racionalidades y paradigmas. El largo y escabroso proceso constituyente boliviano colocó las bases jurídicas para lograrlo, sobreponiéndose a sectores de derecha que en un principio intentaron frenar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, luego se incorporaron a la misma para desviarla de sus objetivos de refundación y, por fin, apostaron a su paralización y descrédito. Sólo la presión del movimiento popular, la voluntad y la capacidad de diálogo del gobierno, su disposición a revisar más de ciento cuarenta artículos de los cuatrocientos diez totales, sumados a la fracasada estrategia de los grupos de poder, hicieron posible la vigencia de la NCPE como instrumento para la refundación de Bolivia.

Las (fracasadas) estrategias de la derecha

En primer lugar, debemos partir de un nuevo fenómeno: luego de la crisis del período 2000-2003, el escenario de conflicto se trasladó al oriente del país. Tal y como explica gráficamente el actual vicepresidente Alvaro García Linera, “el poder económico ascendente, pese a sus problemas, se trasladó del occidente al oriente, pero el poder sociopolítico de movilización se ha reforzado en occidente”; además, “mientras en el occidente emergieron construcciones discursivas que asociaron la crisis económica al neoliberalismo, en el oriente –donde perdura una hegemonía política y cultural empresarial– se asociaron los padecimientos al centralismo paceño y no al modelo económico”. A lo anterior se suma el escaso tiempo de organización de los pueblos originarios de tierras bajas, que salen a la luz pública recién en 1990 con su histórica Marcha por la Dignidad y el Territorio (paradójicamente, son a la vez los primeros en demandar una Asamblea Constituyente en otra marcha del año 2002). Con un contrapeso frágil, los grupos de poder de la región bautizada como Media Luna desarrollaron una estrategia que intentó diversos planes, y que alcanzó su cenit entre agosto y septiembre del 2008.6

Debemos recordar que su primer gran traspié ocurrió con la convocatoria al referendo revocatorio de mandato del 10 de agosto

del 2008. Para su sorpresa, el reto, propuesto por la bancada parlamentaria derechista fue aceptado de inmediato por el presidente Evo Morales, el cual logró un histórico e inédito 67 % de respaldo a su gestión, superior incluso a los porcentajes de la elección presidencial del año 2005. Simultáneamente, el mapa resultante matizó la pretensión de la Media Luna como bloque geográfico homogéneo de oposición, al revelar amplias zonas provinciales afines al gobierno del MAS.

Cerradas las vías institucionales, las élites de poder apostaron entonces por un golpe cívico, materializado en la toma violenta de aeropuertos y consiguiente prohibición de aterrizaje a funcionarios gubernamentales. Le siguió la ocupación y saqueo de entidades públicas dependientes del gobierno central, así como de instancias consideradas enemigas (oficinas recaudadoras de impuestos, institutos de reforma agraria, plantas de hidrocarburos, centrales de comunicaciones, aduanas, sedes de organizaciones campesinas e indígenas, ONG, etc.). Para ello, utilizaron grupos de choque propios, vándalos pagados y marginales que operaron recompensados con el “botín de guerra” producido por el robo de insumos y equipos de aquellas entidades. Con esto se pretendía una suerte de autonomía de facto que ridiculizaba y desconocía la autoridad presidencial, a la vez que sumía al país en una situación de caos incontrolable.

Se agudizó, además, la intervención visible de dos instancias favorables a esa estrategia. Por una parte, la de los Estados Unidos, tanto en la persona de un embajador que sostenía frecuentes reuniones públicas con líderes de la oposición, como en el abundante financiamiento provisto por USAID para la desestabilización y el trabajo de inteligencia y coordinación llevado adelante por agentes de la DEA.7

La otra intervención se encuentra aún concentrada en la labor de buena parte de los medios de comunicación, en particular los televisivos, que constituyen una auténtica mediocracia que actúa pautada por intereses empresariales e ideológicos contrarios al proyecto popular. En el período mencionado más arriba se dedicaron a promover y justificar abiertamente el vandalismo y la delincuencia política, así como a denigrar y ridiculizar al presidente y sus ministros. La tónica editorial usual alimenta hasta hoy una particular construcción mediática de la realidad, y se caracteriza por criticar agresiva y sistemáticamente cualquier iniciativa oficial, subestimar u ocultar logros y avances gubernamentales, presagiar calamidades varias, desinformar por medio de toda clase de rumores y nutrir la idea de una región oriental rica, pujante, emprendedora, progresista, racialmente blanca, dichosa y exenta de contradicciones, versus una región occidental caracterizada como irremediablemente pobre, proclive a las revueltas constantes, fracasada, parásita, defensora del obsoleto centralismo estatal y rehén de la “maldición indígena”.8

Aunque por razones de espacio no puedo extenderme en este último aspecto, es importante subrayar la sagaz y hasta cierto punto exitosa construcción simbólica de los grupos de poder del departamento de Santa Cruz, que lograron difundir y consolidar ciertos temas y demandas, como, por ejemplo, la descentralización político-administrativa (sintetizada, traducida y manipulada en la expresión “autonomía”). Esto a través de la hegemonía sobre legítimas reivindicaciones históricas regionales y la instalación del propio proyecto político en algunos sectores populares que lo asumieron acríticamente.

El denominado “golpe cívico” del mes de septiembre del 2008 fue conjurado por la habilidad política del presidente, su insistente llamado al diálogo, su disposición a aceptar la revisión de algunos artículos de la NCPE, el contundente respaldo a la institucionalidad por parte de los países de UNASUR y la agudización del síndrome de Saturno devorador de sus propios hijos padecido por los grupos de derecha, los cuales se abocaron desesperados a una fase de destrucciones en territorio propio, autobloqueos camineros y masacre de campesinos que pretendió incendiar el país, pero que por el contrario acabó por horrorizar y disgustar a la población en general.

Cambios en la NCPE

Debido al perfil del presente trabajo, resulta imposible abordar la totalidad de los cambios consensuados con la oposición para el nuevo texto constitucional.9 Sin embargo, por su densidad e implicaciones, hay que decir que fue en el emblemático tema de la posesión de la tierra donde hubo retrocesos en relación con el proyecto original. Aquel indicaba que se revertirían al Estado los latifundios improductivos de más de diez mil hectáreas, bajo el principio de retroactividad; el nuevo sólo contempla los casos a futuro. Aunque el cumplimiento de la función económica social sigue en pie como uno de los parámetros para la reversión de tierras, su aplicación real parece hipotecada por diferentes complejidades (ausencia de mecanismos eficientes de control social, vastas regiones en poder de hacendados belicosos, implementación en ciernes de cuatro modalidades autonómicas con sus respectivas competencias, entre otras). ¿Se debió la regresión a una propuesta constituyente en extremo idealista, que minimizó el poder real de los terratenientes en la feraz región oriental del país? ¿Se optó por retroceder momentáneamente para acumular y desatar fuerzas en el próximo período presidencial, en el que muy probablemente Evo Morales será relegido? ¿Se asumió con resignación y realismo el incierto desarrollo a que está sometido el actual proceso de saneamiento y reversión de tierras, resistido a balazos por varios ganaderos? Como sea, y más allá de especulaciones, hay que comenzar afirmando que el enfrentamiento de clases tiene en Bolivia varios componentes, pero el principal de ellos es la lucha por la tierra. Esta constituye, a la vez, la base del poder de la clase dominante; por ello no es casual que la contienda se haya trasladado hoy a la región oriental, ni tampoco es fortuito que el MAS haya cedido –¿estratégicamente?– en sus pretensiones originales, aunque eso

conlleve un costo político apreciable.

Veamos algunos datos ilustrativos: en la actualidad el 91 % de las tierras cultivables está en manos de latifundistas; el 5 % de la población posee el 89 % de los campos; el 15 % posee el 8 %, y el 80 % de los campesinos e indígenas posee sólo el 3 %. El propio PNUD señala que apenas cien familias controlan 25 000 000 de hectáreas (en Santa Cruz, quince familias disponen de 500 000 hectáreas fértiles y cercanas a los mercados). La reforma agraria de 1952 no sólo no afectó las tierras del oriente, sino que el gobierno del MNR adoptó las recomendaciones de los Estados Unidos vertidas en el Plan Bohan, elaborado en 1943, que indicaba la conveniencia de fortalecer y proteger las empresas agrícolas, así como favorecer la dotación individual de tierras, buscando el desarrollo agroindustrial de la región.10

De 1971 a 1978 la dictadura de Hugo Banzer entregó de manera clientelar el 42 % del total de las tierras distribuidas entre 1952 y 1993, lo cual consolidó en particular a la élite cruceña y sus instituciones. Los efímeros auges del azúcar y el algodón en la región facilitaron la obtención de créditos blandos, que en realidad fueron a fortalecer con capital a sectores comerciales y especulativos no productivos.

A mediados de los ochenta, en plena etapa neoliberal, el Banco Mundial promovió y financió el desarrollo de la soya en Santa Cruz, que se apoya hasta hoy en subsidios estatales para combustibles, ampliación de la frontera agrícola (deforestación), latifundio y monoproducción. Ese departamento, junto con los de Beni y Pando, es, además, asiento de la acumulación improductiva pero rentable de la tierra para la ganadería extensiva, debido a sus favorables condiciones ambientales. Como expresa Miguel Urioste, director de la Fundación Tierra: "...la actual estructura de propiedad de la tierra en oriente no genera riqueza, empleo, bienestar ni sostenibilidad ambiental", aunque ciertamente es fuente de prosperidad para unos pocos. La revolución agraria propuesta por el MAS, cuya base social se compone en su mayoría por hombres y mujeres sin tierra, se asienta en la eliminación del latifundio, la distribución de la tierra, el crédito barato, la maquinización agrícola y el acceso a mercados alternativos. Tiene en el ubérrimo oriente de Bolivia el mejor y más promisorio escenario geográfico, pero sin dudas el peor escenario político.

Réditos y retos

El proceso de resistencias populares iniciado en el siglo XVIII, sumado a diversos factores, evolucionó durante doscientos veintisiete años hasta llegar a la etapa actual, en la cual hace crisis la triple deuda histórica nacional: del Estado con las regiones, de una justa distribución de la riqueza, y del reconocimiento de la identidad del país como pluricultural y multiétnico. A la vez, la esperanza de cambios se transforma en un vigoroso motor movilizador en la conciencia de las grandes mayorías, que perciben condiciones favorables para el advenimiento de su Jach´a Uru. Consideramos que esa percepción popular constituye hasta el momento el rédito mayor del proceso de cambio iniciado formalmente con la elección presidencial del año 2006, habida cuenta de los escasos éxitos materiales espectaculares. Sin embargo, debemos tomar nota de algunos logros y avances de indudable impacto popular:

1. Erradicación del analfabetismo. En sólo dos años y medio de aplicación del programa respaldado y asesorado por Cuba y Venezuela, se incorporó a clases el 99,7 % de los iletrados identificados por el Ministerio de Educación y Culturas; un total de 790 000 bolivianos saben leer y escribir como resultado del plan en el que laboraron 46 457 facilitadores y 4 810 supervisores. Más de 212 000 recibieron atención oftalmológica y se les han entregado lentes. El 20 de diciembre del 2008 Bolivia es declarada tercer territorio libre de analfabetismo en la América Latina.11

2. Atención médica gratuita en un país con profunda mercantilización de la medicina. Con el concurso de unos dos mil médicos y especialistas cubanos, en dos años y medio se realizaron 15 000 000 de atenciones sin costo, con más de 15 000 vidas salvadas, 22 000 operaciones quirúrgicas, 1 500 000 exámenes de laboratorio, y la instalación completa de más de cuarenta hospitales integrales con equipos de última generación. Más de cinco mil estudiantes bolivianos son beneficiados con becas para estudiar carreras médicas en Cuba.

3. Implementación de la renta a la vejez. Un total de 680 000 personas, por el sólo hecho de tener más de sesenta años de edad, son beneficiadas con 2 400 bolivianos (Bs) al año (1 800 Bs en el caso de que sean pensionados).

4. Bono escolar. Un total de 1 802 000 estudiantes de escuelas fiscales son beneficiados con un bono anual de 200 Bs.

5. (Re)nacionalización de hidrocarburos, que se inscribe en intentos históricos similares pero frustrados en diversos ámbitos. El primer antecedente fue la expropiación de la empresa norteamericana Standard Oil por parte del presidente David Toro en 1937. La segunda nacionalización ocurrió durante el mandato de Alfredo Ovando, quien expropió la Gulf Oil en 1970. En 1952 se nacionalizaron las minas de estaño. Evo Morales renacionalizó los hidrocarburos, refundó la empresa petrolera estatal (YPFB) e inició negociaciones y adquisiciones accionarias de empresas extranjeras, firmando nuevos contratos y estableciendo el 82 % de regalías en favor del Estado. Además, nacionalizó la emblemática mina de estaño de Huanuni, la importante empresa de fundición Vinto, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

5. Completamiento del proceso constituyente y colocación de los fundamentos y principios filosófico-políticos para otro modelo de

país en la NCPE.

6. Integración e interacción dinámica con países y asociaciones regionales soberanas, tales como UNASUR, ALBA y Banco del Sur.

7. Inédita incorporación activa de las Fuerzas Armadas como factor de respaldo a la institucionalidad y al ejercicio de gobierno, y como apoyo a diferentes proyectos sociales.

Destaco a continuación tres retos que considero significativos, en particular por sus implicaciones:

1. La indefinición estructural del MAS, que oscila entre su identidad como partido, y, a la vez, como aglutinador de movimientos sociales, articulado todo en torno a la figura del caudillo, clásica en la vida política boliviana. Si bien esas características han facilitado fluctuaciones ágiles y eficaces, es improbable que la dinámica se sostenga de forma indefinida, con el agravante de urgencias que hipotecan los esfuerzos que deberían invertirse a enrumbar y consolidar la estructura. Entre los lastres que padece, debemos destacar el del peso histórico ejercido en la cultura política nacional por el clientelismo, y la percepción del partido en el gobierno como asegurador de cargos y empleos. Investigadores como Roberto Laserna, denominan rentismo político al "comportamiento que busca obtener réditos particulares –ventajas, beneficios o ingresos, para individuos o grupos–, mediante el ejercicio del poder político o la adquisición de influencia en el sistema decisional… involucra habitualmente al Estado y afecta los recursos públicos… concentra los esfuerzos y las expectativas económicas en la política (de ahí la aparente politización de la sociedad boliviana que engaña a tantos observadores), y al hacerlo desalienta la actividad productiva creadora de valor".

2. A lo anterior se agrega no sólo la escasez de militantes con sólida formación política y profesional, sino la heterogeneidad formativa de los mismos. Aunque Bolivia posee una copiosa experiencia en Educación popular y medios de comunicación alternativos, hasta el momento sólo se ha organizado una red de emisoras radiales (denominada Patria Nueva) y no parece existir una estrategia de educación política orgánica, sostenida, sistemática y coherente, más allá de spots televisivos y explicaciones esporádicas de uno u otro funcionario. Sin estrategias formativas, los sectores populares no lograrán apropiarse de mejores herramientas para el análisis de acontecimientos y procesos desde una matriz crítica, y, por tanto, se les hará arduo el aporte creativo e inteligente al proceso de cambio social, así como la asunción de roles realmente protagónicos. A modo de ejemplo, la REPAC, instancia técnica de apoyo a la asamblea y el proceso constituyente, elaboró y distribuyó decenas de miles de cartillas temáticas; sin embargo, a pesar de contar con diseños gráficos atractivos, no lograron remontar un estilo y un vocabulario técnico y árido, y en ocasiones sólo reprodujeron literalmente los textos de la NCPE.

3. Bolivia se propone cambios sustantivos en su modelo económico. La NCPE interpela el paradigma de desarrollo occidental contemporáneo introduciendo la propuesta de una satisfacción material austera, cuestionadora de la concepción del ser humano como consumidor contumaz. Reconoce cuatro formas de organización económica (comunitaria, estatal, privada y social cooperativa) e impone al Estado la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo, con el ser humano como máximo valor.12

Sin embargo, el reto es descomunal. Seis de cada diez bolivianos son pobres (nueve de cada diez en el área rural); sólo el 18 % de la población económicamente activa tiene empleo estable. Un 90 % de las unidades económicas son de tipo familiar y dan empleo a un 83 % de los trabajadores; en dichas unidades labora el 91 % de los pobres del país.

Más allá de intenciones políticas emancipatorias, Bo-livia deberá entrar de lleno en la redefinición de su patrón de desarrollo. Como mencionamos más arriba, dicho patrón fue históricamente dependiente de la plata, la goma, la castaña, el estaño, el petróleo y, en la actualidad, el gas. Se trata de un modelo extractivo de base estrecha, apoyado en recursos naturales primarios a los cuales se les agrega poco valor. La NCPE le asigna al Estado un rol protagónico en la regulación de las actividades económicas, le otorga control sobre sectores estratégicos como recursos naturales, servicios públicos, telecomunicaciones, energía, transporte, y sobre el excedente. La presión ejercida por grandes empresas, que en la actualidad generan nada menos que el 65 % del PIB, sumada al escenario internacional de incertidumbres y caída de precios de materias primas, torna difícil el cambio propuesto, y, a la vez, se puede deslizar hacia la tentación estatal del aprovechamiento de rentas hidrocarburíferas para paliar momentáneamente y de manera asistencialista algunas necesidades, sin afectar a profundidad la estructura socioeconómica.

4. Cuando el presidente Morales describe el proceso de cambios como una "revolución democrática cultural" apunta al racismo, entre otros, como uno de los fenómenos más difíciles de superar. El estudio sobre diversidad cultural llevado a cabo por la Fundación UNIR entre julio y agosto del 2008 revela que en una escala de uno a siete puntos la población encuestada considera que como promedio la discriminación está en 5,7 en el país y 5,1 en su lugar de residencia; asimismo, el 82,2 % de la población opina que existe un nivel alto de racismo en Bolivia y el 62,4 % que existe en su localidad de residencia.13 Paralelo al avance popular, se multiplicaron expresiones y manifestaciones de racismo e intolerancia que se consideraban restos de un pasado superado. Debemos tomar en cuenta que para los grupos de poder la presencia mayoritaria de indígenas en el país no resultó

problemática mientras se mantuvo bajo control, encuadrada en las variadas y seculares dinámicas del sometimiento. Cuando analizamos la agudización de fenómenos discriminatorios, es fundamental advertir que en Bolivia el racismo es antes que nada un sistema de dominación social de primer orden, rearticulado a su vez con los sistemas de clase y de género. Constituye un mecanismo de sujeción que se actualiza en formas diversas, modernizadoras del pongueaje colonial14 (entre otras, un tipo de servidumbre análoga a la esclavitud en ciertas regiones del Chaco boliviano, trabajo forzado, trabajo infantil gratuito, inexistencia de derechos laborales elementales para empleadas del hogar –en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios–, desconocimiento de autoridades y sistemas normativos de diferentes etnias, imposición de culturas y cosmovisiones, reducción de culturas ancestrales al ámbito de lo folklórico, etc.).

Conclusión

Bolivia celebra en el 2008 veinticinco años de democracia ininterrumpida; buena parte de ese cuarto de siglo estuvo regido por la denominada “democracia de alternancia pactada”, mediante la cual tres o cuatro partidos se distribuían el ejercicio de gobierno, la gerencia excluyente de finanzas y el usufructo de rentas, y se ignoraba a la mayor parte del pueblo y sus derechos elementales. La hegemonía de la clase dirigente entró en crisis, y los movimientos sociales, como rostro visible y activo de la lucha de millones de seres invisibilizados, llegaron al gobierno con el MAS. No están en el poder, pero se encuentran en la tarea de construirlo; lo hacen no sólo desde abajo, sino abajo mismo. En tales circunstancias, la praxis de liberación se debe tornar creativa, imaginativa, apoyada en transformaciones que deben administrarse con eficacia, en el marco de una tarea material mucho más difícil y demandante que la acumulada a partir de la larga experiencia como movimientos de oposición.15 Se entreteje y urde desde la vehemencia de las corrientes profundas de las expectativas populares, con el horizonte utópico que describe poéticamente la frase final del prólogo de la NCPE: “Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia”.

15 de noviembre del 2008

Aniversario del martirio de Julián Apaza (Tupaj Katari)

.....

Notas:

1—Tawantinsuyu significa “cuatro regiones”, y se refiere a la división territorial del imperio incaico, tomando como centro al Cuzco (Chinchaysuyu al norte, Cuntisuyu al sudoeste, Antisuyu al este y Collasuyu al sur).

2—Es célebre el augurio de Tupaj Katari, cuando gritó a sus verdugos en el cadalso: “¡Ustedes me matan, pero volveré y seré millones!”.

3—En este acápite seguimos de cerca el marco interpretativo que propone Rafael Puente Calvo, dirigente de la izquierda boliviana.

4—Ver Pablo Stefanoni: “Bolivia bajo el signo del nacionalismo indígena”, en Karin Monasterio, Pablo Stefanoni y Hervé do Alto: Reinventando la nación en Bolivia, Clacso Libros y Plural, La Paz, 2007.

5—Sumaj qamaña en idioma aymara, Sumaj kausay en quechua, o Ñanderekó en guaraní.

6—La denominada Media Luna comprendió originalmente los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija; posteriormente se sumó Chuquisaca. Fue un constructo social y geopolítico que pretendió hegemonizar la oposición al proyecto del MAS, y que incluyó en sus versiones extremas la conformación de una confederación y aun la independencia.

7—El diplomático, así como la DEA, fueron expulsados del país. USAID mantiene en secreto buena parte de los destinatarios y montos de sus financiamientos en Bolivia (ver Jeremy Bigwood: “New Discoveries Reveal US Intervention in Bolivia”, en http://nacla.org). Dicha organización es investigada por el gobierno nacional, que cuenta con abundante información para declararla eventualmente “institución non grata”. Una brevísima síntesis de la injerencia norteamericana se puede encontrar en el artículo de Roger Burbach, “The United States: Orchestrating a Civic Coup in Bolivia”, en http://alainet.org.

8—En octubre del 2008, luego de realizar estudios de casos, la Federación Internacional de Derechos Humanos determinó que los medios de comunicación privados en Bolivia promueven el racismo, el odio y la discriminación.

9—Detalles de los mismos, así como un cuadro comparativo entre ambos textos (el de la NCPE original y el texto definitivo, compatibilizado en el Congreso en octubre del año 2008) se pueden consultar en www.repac.org.bo

10—Por ejemplo, el departamento de Santa Cruz recibió entre 1955 y 1960 el 41 % del total de recursos del programa SAI (Crédito Agrícola Supervisado), implementado por el gobierno norteamericano. Ver Ximena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros: Los barones del oriente –el poder en Santa Cruz ayer y hoy–, Fundación Tierra, Santa Cruz, 2008.

11—El método Yo sí puedo fue desarrollado en Cuba. Cuenta con cartillas, sesenticinco videoclases y mecanismos de examen y verificación. Tiene previsto un segundo nivel avanzado.

12—Con más de cien artículos que son en sí mismos una prueba de la complejidad del desafío, la cuarta parte de la NCPE, centrada en la estructura y organización económica del Estado, se convierte en la más extensa del mundo sobre el tema.

13—UNIR fue creada por la ex-Defensora del Pueblo, Ana María Romero. Las encuestas sobre diversidad correspondientes al 2006 y el 2008 se pueden consultar en www.unirbolivia.org

14—El pongueaje era un sistema de servidumbre colonial por el cual el indígena debía trabajar por turnos y en forma gratuita en las tierras de los hacendados o de la Iglesia. Se abolió legalmente en 1945, aunque su práctica persiste hoy en algunas regiones, y su legitimidad en el imaginario de no pocos sectores sociales.

15—Ver Tesis # 16 en Enrique Dussel: Veinte tesis de política, Ed. CREFAL y Siglo XXI, México, 2006.

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2012 A LAS 15:47



0



0